

VIEJO ESPECTADOR



Carlos Sentís

## Moderar y arbitrar

Todavía hay quienes piensan que se puede alcanzar un pacto de Estado –trabajado como nadie por Duran Lleida–. Se ha podido percibir que si Zapatero rectificara a fondo puede conseguir el apoyo de grupos parlamentarios –y quizá incluso del PP– para llegar a un acuerdo, aunque fuera una sombra del de la Moncloa. Son muchos los que han reprochado al presidente del Gobierno, en el Parlamento y fuera de él, su ilusionismo al creer en la posibilidad de nuestra salida de la crisis, casi sin más. Otros han criticado medidas que ha tomado de corto alcance y poca efectividad. Se podrían citar algunos economistas que han visto las cosas tal como eran antes de que estallara la realidad en Europa, pero cabe señalar que uno de los primeros en hablar claramente de la conveniencia de unos acuerdos ha sido el rey Juan Carlos. Sin ir más lejos, el día en que pronunció por televisión su mensaje de Fin de Año.

Sería quizá algo exagerado decir que sus recientes apariciones públicas rememoraran la del 23-F. Entonces pudo actuar de uniforme ante las cámaras de televisión porque una de las pocas prerrogativas que tiene el rey de España es la de interpretar la jefatura de las Fuerzas Armadas. Cuando tuvo lugar la redacción de la Constitución los socialistas procuraron limitar en lo posible sus facultades, pero no le negaron dicha jefatura porque pensaron que podía ser muy útil en un momento dado. En otro aspecto del “reinar, pero no gobernar”, se establece que el Rey puede moderar y arbitrar cuando lo crea conveniente. Es justamente lo que está haciendo ahora.

No ayuda a ningún partido. Ni al Gobierno, ni a la oposición. Simplemente defendiendo el papel de España, como ha hecho hace un par

de días con su larga entrevista –almuerzo de trabajo– con el presidente Obama en la Casa Blanca.

El papel del rey en las constituciones políticas modernas no siempre es igual en todos los países. Ni en todos los momentos. Mantener a la corona como no responsable de la política, que cae de lleno en el gobierno de turno, evita que cualquier tropiezo real ponga en crisis el sistema entero. Precisamente en España tenemos un ejemplo claro del delicado papel del monarca, solo o acompañado en la jefatura del Gobierno.

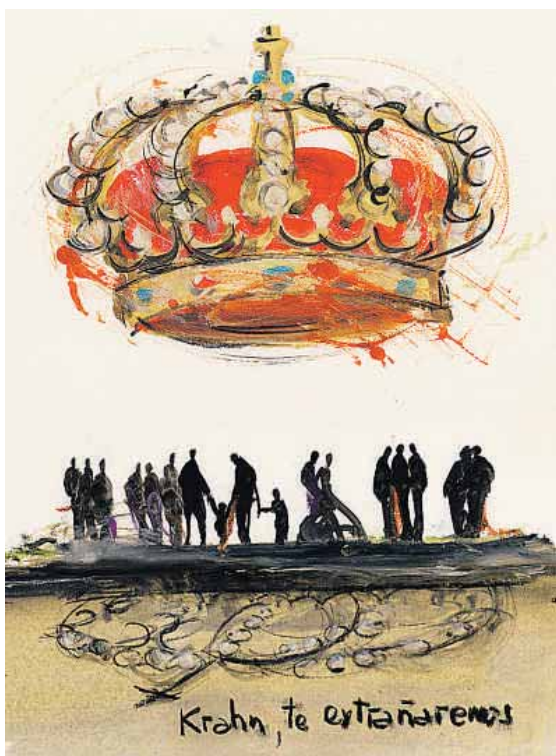
Antes de Víctor Manuel de Italia, que cayó arrastrado por el derribo del fascismo mussoliniano, y mucho antes también de la abdicación de Constantino de Gre-

cia, tras la dictadura de los coroneles, la historia nos ha dejado la vicisitud de don Alfonso XIII. Tenía, además de poder político –nombrar primer ministro o disolver las Cámaras– plena jefatura militar. Esto lo llevó a intervenir excesivamente en la peripecia guerrera del Rif, en 1921. Fue él quien impuso al general Fernández Silvestre, responsable directo del descalabro de Monte Arruit frente al cabecilla Abdeldkrim. Justamente para disimular el error del rey, el general Miguel Primo de Rivera, aprovechando también otras circunstancias, proclamó su dictadura, en 1923, desde su capitania general de Barcelona. Don Alfonso convivió con la dictadura siete años. En los últimos tiempos, consciente de la impopularidad de don Miguel, hizo lo que de entrada tenía que haber hecho: anular toda dictadura. El cese del dictador, por tardío, no le sirvió, puesto que la ola popular había ido más allá.

En efecto, cuando el Rey nombró primer ministro a Dámaso Berenguer, que era uno de los que se habían opuesto a Primo de Rivera, apareció en *El Sol* de Madrid un artículo diciendo: “No es Berenguer el problema, sino quien está detrás”. Era una primera voz levantada por el prestigioso don José Ortega y Gasset, a quien se le atribuye el *Delenda est monarchia*.

Que el Rey tenga condiciones políticas es una positiva posibilidad. Cuando concurren, como en el caso de don Juan Carlos, se puede lamentar que no gobierne. Sin embargo, siempre existe la garantía de que la Corona permanezca fuera de la responsabilidad ejecutiva preservando en todo momento la institución.

Sea como sea, debemos celebrar, una vez más, el acierto que tuvo nuestro país al restaurar la monarquía que inició la transición y que ha significado los mejores años de nuestra historia.●



ÓSCAR ASTROMUJOFF

Francesc-Marc Álvaro



## Expertos y políticos

Si usted es gobernante, le chuta la pelota al experto de turno y, luego, Dios dirá. El asunto, aunque viejo, siempre asoma. Dada la alta complejidad de los retos que tratan los parlamentos democráticos, los técnicos, científicos, asesores y consultores tienen empleo asegurado, con y sin crisis. En el Ayuntamiento de Barcelona, sin ir más lejos, alguien cobró un puñado de euros por recomendarle al alcalde que debía relacionarse más con la prensa de Madrid, un hallazgo original que, obviamente, sólo una gran eminencia podía llegar a formular.

Pero, dejando a un lado los encargos alimenticios que se hacen a los amigos y camaradas, es un hecho que cualquiera que hoy quiera gobernar debe hacerlo con instrumentos fiables de aproximación a la realidad, y ahora no hablo de las encuestas, que tan exageradamente condicionan los actos de nuestros cargos electos. La ciencia y la técnica están, también, para que las decisiones del político sean menos arbitrarias. Los malentendidos mayúsculos surgen cuando el trabajo de los científicos y los técnicos se con-

### ¿Qué ocurre cuando los guardianes del dogma han de reconocer que no tenían toda la razón?

vierte en dogma. Así ha ocurrido con el cambio climático, desde hace algunos años. Los errores, deslizos, inexactitudes y chapuzas en varios trabajos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) de la ONU nos invitan a preguntarnos acerca de la validez de las políticas habituales sobre medio ambiente y energía. Si la base técnica de una prioridad gubernamental está repleta de datos más que discutibles, tenemos el deber de revisar ese objetivo político. ¿Qué ocurre cuando los guardianes del dogma (blindados tras la verdad científica) han de reconocer que no tenían toda la razón?

Expertos –bueno es recordarlo– los hay de toda ideología, porque el hombre de ciencia no deja de ser ciudadano, con valores e intereses concretos más allá de su profesión. Es algo que no resta valor a otra circunstancia: la forma de ver el mundo del científico –Weber ya lo explicó– es muy distinta a la del político, aunque sería absurdo negar que, en el presente, hay cada vez más científicos doblados de emprendedores, los cuales aprenden a combinar su tarea clásica con la toma de decisiones estratégicas de acuerdo con el interés general y/o las dinámicas del mercado. Esto pasa tanto en las ciencias sociales –preñadas de ideología explícita siempre– como en las ciencias duras o experimentales.

El físico alemán Heisenberg propuso una definición de experto insuperable: “Alguien que conoce cuáles son los peores errores que pueden cometerse en el tema de su especialidad, y que sabe cómo evitarlos”. Serían estas figuras las más necesarias cerca de los políticos, pero –a la vista del panorama– es evidente que no se les escucha. Será –tal vez– que los sabios de veras están acostumbrados a evitar el autoengaño, sustancia a la que muchos políticos son adictos.●

DEBATE. La crisis económica / Víctor Pou

## Estado de emergencia

La economía española ha entrado en el año nuevo con los viejos problemas conocidos, que se agigantan por momentos. A pesar del optimismo oficial, seguimos deslizándonos peligrosamente hacia situaciones muy delicadas que entrañan riesgos evidentes de conocer una fase prolongada de recesión o de crecimiento muy débil, lo que significaría poner fin al proceso de convergencia español con las principales economías de nuestro entorno iniciado en 1985 y consolidado entre 2002 y 2007.

El año 2009 se ha cerrado con un déficit presupuestario que se ha quintuplicado, al pasar de 13,9 millones a 71,5 millones de euros hasta noviembre, lo que equivale al 6,8% del PIB. A este desequilibrio hay que sumarle el de las autonomías y

los ayuntamientos, lo que provoca un déficit total que ya supera el 11% del PIB. Las finanzas públicas avanzan hacia una situación insostenible, caen los ingresos y suben los gastos, mientras que la deuda pública ha pasado del 36% del PIB en el 2007 al 60% actual.

Las subidas impositivas anunciadas –rentas del capital e IVA– tendrán un impacto reducido y son desaconejadas por los organismos internacionales. Se han tomado a pesar de las recomendaciones de la OCDE, que apuntan a la conveniencia de esperar hasta el 2011 o incluso el 2012.

El Gobierno trata de presentar un programa de consolidación fiscal a cuatro años vista para reducir el déficit de todas las administraciones públicas al 3% en el 2013, tal como exige la Comisión Europea, pero no es capaz de concretar el camino para alcanzar este difícil objetivo.

Haciendo un paralelismo entre una economía nacional y una economía familiar, el sentido común exigiría que el cabeza de familia empezara por reconocer la gravedad de la situación –un verdadero estado de emergencia–, enmendara las medidas incorrectas tomadas anteriormente y adoptara, por una parte, medidas drásticas de contención del gasto y, por otra, propiciara el crecimiento de los ingresos facilitando las actividades de los miembros de la familia.

La contracción fiscal del 2010 es muy parecida a la que se adoptó en Japón en 1997 y que llevó a este país a la recesión más profunda registrada desde el final de la II Guerra Mundial. En ese país, a una década prodigiosa siguió otra pérdida. Si no hacemos los deberes, a los largos años del boom español anterior al 2007 podría seguir nuestra propia década perdida.●